



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Defensa y Seguridad
Caracas - Venezuela.



CPDS- N° 293/10

Caracas, 09 de diciembre de 2010

Ciudadano

DR. IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario de la Asamblea Nacional
Su Despacho.-

Reciba un cordial y respetuoso saludo, en nombre del cuerpo de Diputados, Equipo Técnico y Administrativo de esta instancia parlamentaria.

Sirva la presente para remitirle el **Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional**, con su respectivo Impacto Económico y Exposición de Motivos, a los fines de que sea considerado para su Primera Discusión

Al manifestarle mi estima y consideración, quedo de usted.

Atentamente

DIPUTADO RAÚL ÁLVAREZ BRACAMONTE
Presidente



RAB/BSR/gt.

PATRIA SOCIALISTA O MUERTE
¡VENCEREMOS!

PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA POLÍTICA Y AUTODETERMINACIÓN NACIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asamblea Nacional, fiel representante del pueblo venezolano, basada en el ejemplo histórico de El Libertador Simón Bolívar, y fundamentada en los principios y valores constitutivos de nuestra identidad nacional, así como, en los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos define como una patria libre y soberana, promotora de la libertad, independencia, paz, convivencia, igualdad, autodeterminación y soberanía nacional, en uso de sus atribuciones presenta, a través de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, el **Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional**, cuyo objeto es proteger el ejercicio de la libertad política y la autodeterminación nacional ante cualquier injerencia extranjera a través de ayudas económicas o aportes financieros que puedan estar destinados a atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas legalmente constituidas, así como, normar la protección del Estado ante la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes.

En éste sentido, la dispersión de normas y regulaciones en materia de control, origen, uso y destino de fondos para el financiamiento de procesos políticos, organizaciones partidistas, campañas electorales y candidaturas a cargos de elección popular, entre otros, impone la existencia de un instrumento legal integrador que llene ese vacío en nuestra legislación nacional, siendo particularmente necesario ante los precedentes que ha padecido la República y sus ciudadanos a consecuencia de acciones desestabilizadoras e insurreccionales promovidas por expresiones radicales de la esfera política internacional que en procura de obtener beneficios particulares inspirados por intereses foráneos ajenos al país han amenazado nuestra soberanía y autodeterminación nacional.

No debe escapar a la fundamentación que justifica la presentación de éste Proyecto de Ley, la peligrosa situación que entraña la penetración de recursos provenientes del narcotráfico, así como de otras actividades ilícitas, destinadas al financiamiento de actores u organizaciones con fines políticos, circunstancia que desnaturaliza y corrompe el accionar de los actores u organizaciones que los reciben subordinándolos a su agenda política específica con su consabido, y a veces irreparable, daño a la sociedad que los sufre tanto en el medio público como en el privado.

El Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, está estructurado en diez artículos una disposición final, siendo su ámbito de aplicación legal las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado organizadas para desarrollar actividades con fines políticos o actividades para la defensa de derechos políticos, que atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación, el ejercicio de las instituciones nacionales o de las autoridades legalmente constituidas.

Corresponde señalar, que ésta iniciativa legislativa encuentra en el derecho comparado plena justificación, encontrándose previsiones constitucionales y legales que en materia de la injerencia extranjera han instituido numerosas naciones para combatir las amenazas que implica tal irregularidad, a manera de ejemplo pueden mencionarse las siguientes:

En **México**, el Artículo 33 de su Constitución, en su segundo párrafo, indica claramente que “Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país.”.

En **Costa Rica**, el Artículo 19 revela sobre los extranjeros que “No pueden intervenir en los asuntos políticos del país....”.

En **Ecuador**, el Artículo 14 relata que “Los extranjeros están excluidos del ejercicio de los derechos políticos.”.

Mientras que el segundo párrafo del Artículo 97 de la Constitución de **El Salvador**, afirma que “Los extranjeros que directa o indirectamente participen en la política interna del país pierden el derecho de residir en él”.

En **Honduras**, el Artículo 32 expone que “Los extranjeros no podrán desarrollar en el país actividades políticas de carácter nacional ni internacional, bajo pena de ser sancionados de conformidad con la ley.”.

Por su parte, el Artículo 4 de la Constitución de **Brasil** señala “La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los principios” de “independencia nacional” y “no intervención”, aludiendo a cualquier persona física o jurídica extranjera.

De igual manera, las leyes electorales de países como Brasil, El Salvador, Costa Rica, Perú, México y Argentina, entre otros, prevén sanciones similares a los extranjeros que participen directa o indirectamente en actividades políticas, pudiendo ser deportados del territorio nacional en el caso de cometer esa infracción, así como, prohibiendo a los extranjeros y a las personas jurídicas de cualquier naturaleza y nacionalidad, efectuar, directa, indirectamente o en forma encubierta, contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar los gastos de los partidos políticos. Estableciendo a su vez, a los extranjeros que sean personas físicas o jurídicas, la prohibición de otorgar préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio de cualquier clase para los partidos políticos, mientras a sus connacionales se les aplica, dentro de algunas de éstas legislaciones, penas que inclusive llegan a la privación de libertad por recibir fondos de personas naturales o jurídicas para el financiamiento político que provengan del extranjero.

Es así como, en cumplimiento de los deberes constitucionales que impone la República, y a la luz del derecho comparado aplicado a la materia, la Asamblea Nacional por medio de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, comprometida con los valores, principios y más altos intereses del Estado y de su ciudadanía, una vez realizado el estudio de impacto económico y presupuestario que acompaña la presente iniciativa legislativa, somete a la consideración del órgano legislativo nacional el **Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional**

Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional

Objeto

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera que a través de ayudas económicas o aportes financieros destinados a organizaciones con fines políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas; así como la participación de ciudadanos extranjeros que, bajo el patrocinio de estas organizaciones, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República.

Ámbito de aplicación

Artículo 2. Esta ley es aplicable a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado organizadas para desarrollar actividades con fines políticos o actividades para la defensa de derechos políticos, que atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación, el ejercicio de las instituciones nacionales o de las autoridades legalmente constituidas.

Definiciones

Artículo 3. A los efectos de la presente ley, se entiende por:

1. Organizaciones con fines políticos: aquellas que realicen actividades públicas o privadas, dirigidas a promover la participación de los ciudadanos en los espacios públicos, ejercer control sobre los poderes públicos o promover candidatos que aspiren ocupar cargos públicos de elección popular.

2. Organizaciones para la defensa de los derechos políticos: aquellas que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

Financiamiento

Artículo 4. El patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales.

Donaciones

Artículo 5. Las organizaciones con fines políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o las personas naturales que realicen actividades políticas sólo podrán recibir donaciones o contribuciones que provengan de personas naturales o jurídicas nacionales.

Sanción a organizaciones

Artículo 6. Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que a través de sus directivos, personas interpuestas o por vía anónima reciban ayudas económicas o aportes financieros por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.

Sanción a personas naturales

Artículo 7. Las personas naturales que reciban ayudas económicas, aportes financieros para el ejercicio de actividades políticas por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionadas con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.

Injerencia extranjera

Artículo 8. Los representantes de organizaciones con fines políticos, representantes de las organizaciones para la defensa de los derechos políticos o particulares que inviten a ciudadanos u organizaciones extranjeras para que, bajo su patrocinio, emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía, serán sancionados con multa comprendida entre cinco mil a diez mil unidades tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.

Los ciudadanos y ciudadanas extranjeros que participen en las actividades establecidas en este artículo, estarán sujetos al procedimiento de expulsión del territorio de la República, conforme a lo previsto en las leyes que regulan la materia.

Pena accesoria

Artículo 9. El presidente de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos o quienes reciban las ayudas económicas, aportes financieros o auspicien la presencia de ciudadanos extranjeros que atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación y sus instituciones, tendrán como pena accesoria la inhabilitación política por un lapso entre cinco a ocho años.

Reincidencia

Artículo 10. Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que reincidan en la recepción de ayudas económicas o aportes financieros extranjeros, serán inhabilitadas para participar en procesos electorales por un lapso entre cinco a ocho años y la multa prevista en el artículo 8 de esta Ley será aumentada en una tercera parte.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los días del mes de de dos mil. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.



ASAMBLEA NACIONAL

**Informe de Impacto Económico y Presupuestario
del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política
y Autodeterminación Nacional**

DIAEF - DGIDL

**** Diciembre 2010 • SERIE IE DS 1210 406**



Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	2
1. Introducción	3
1.1 Presentación del Informe	3
1.2 Identificación y Delimitación del Problema...	3
1.3 Necesidad y Justificación del Proyecto de Ley	4
2. TEORÍAS RELACIONADAS AL PROYECTO DE LEY	4
2.1 Marco Conceptual.....	4
3. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO.....	7
3.1 Impacto Presupuestario	7
3.2 Impacto Económico	8
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	8
2.1. Conclusiones	8

RESUMEN EJECUTIVO

PALABRAS CLAVES: TEORÍA DEL CRIMEN, ORGANIZACIONES POLÍTICAS, FINANCIAMIENTO.



1. INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN DEL INFORME

El presente informe tiene por objetivo responder a la solicitud realizada por la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa a la Dirección de Investigación y Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional (DIAEF) para la evaluación del impacto e incidencia presupuestaria y económica que generaría la aprobación del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (PLDSPAN) el cual tiene por objeto "...proteger el ejercicio de la soberanía política y autodeterminación nacional mediante la regulación de las ayudas, donaciones o aportes económicos que, siendo destinados a organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos o a personas naturales, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República." (art. 1).

Con el presente informe de impacto económico y presupuestario se da cumplimiento a lo estipulado en el numeral 5 del artículo 145 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana (CRBV) en el año de 1999, se afianza el principio fundamental de una República irrevocablemente libre e independiente. Además, nuestra carta magna establece como derechos irrenunciables de la nación la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

Asimismo, dispone que el principio de soberanía popular encuentra su concreción normativa en los artículos como el 62, 63 y 67 constitucionales que reconocen el derecho que asiste a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar libremente en los asuntos públicos, el derecho al sufragio o el derecho de asociación política respectivamente, es decir los conceptos de soberanía, autodeterminación nacional y derechos políticos se encuentran íntimamente vinculados. Estos preceptos establecidos en la CRBV dejan el claro la independencia de la nación y su autodeterminación

1.2 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Es importante tener presente que los derechos políticos no están reconocidos para todos los venezolanos. Según el artículo 39 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sólo quienes ostenten la condición de ciudadanos son titulares de derechos y deberes políticos; es decir, aquellos que sean mayor de edad y no estén sujetos a inhabilitación política o interdicción civil.

También es importante tener presente que el artículo 40 ejusdem expresa que "...los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución."

Estas normas constitucionales que establecen la exclusividad de los derechos políticos a los ciudadanos venezolanos, salvo las excepciones establecidas, lo que persiguen es garantizar y proteger los principios de autodeterminación y soberanía de la República.



La defensa de estos principios no puede limitarse a prohibir la injerencia extranjera en forma directa, bien sea que ciudadanos extranjeros que no cumplan los requisitos de ley, ejerzan el derecho al voto o se postulen para cargos de elección popular. Existen otras maneras mediante las cuales ciudadanos extranjeros, entes públicos o privados de otros países, organizaciones no venezolanas, en forma solapada llegan a tener injerencia en la vida política venezolana pudiendo inclusive influir el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, tal como pudiera ser el caso del financiamiento de organizaciones políticas o similares.

1.3 NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

La injerencia indirecta de extranjeros, bien sea de gobiernos o particulares, en la soberanía venezolana, en la figura de ayuda económica puede derivar en la imposición de doctrinas, ideologías políticas, lineamientos o de cualquier otra manera influir en la decisión de asuntos exclusivos de los venezolanos vulnerando así los principios de soberanía y autodeterminación.

Si se permite que ciudadanos o grupos extranjeros contribuyan con sumas de dinero a promover, patrocinar o de alguna forma aportar dinero a organizaciones políticas o que tengan injerencia en los asuntos políticos, se corre el riesgo que los miembros de esos partidos que ocupen cargos públicos se vean comprometidos a favorecer los intereses de los donadores, razón por la cual deben enfatizarse que no pueden sacrificarse los intereses de la patria por intereses extranjeros

Es por ello que surge la iniciativa legislativa de normar este tipo de comportamiento en procura de eliminar o por lo menos minimizar la influencia de personas o grupos extranjeros en las políticas nacionales

2. TEORÍAS RELACIONADAS AL PROYECTO DE LEY

2.1 MARCO CONCEPTUAL

El enfoque clásico de la delincuencia se originó en la explicación y es evidente en los escritos de Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques Rousseau, entre otros. De acuerdo con esta perspectiva, la inteligencia y el pensamiento racional, son características fundamentales de las personas y la base principal de su comportamiento. En otras palabras, la gente tiene libre albedrío para tomar decisiones y llevar a cabo sus propios intereses. A finales de 1700, los filósofos Cesare Beccaria y Bentham Jeremy aplicaron estas ideas a la delincuencia, argumentando que las personas eligen libremente delinquir. De acuerdo con Beccaria y Bentham, las decisiones de las personas para delinquir están guiadas por cálculos que sopesan el placer que esperan obtener de los actos delictivos contra el dolor potencial que recibirían si fueran capturados y castigados por sus crímenes. Esta perspectiva, conocida como la escuela clásica de la criminología, sostiene que los cálculos de las personas implica el conocimiento de la ley y su percepción de la probabilidad de castigo (en base a sus experiencias y conocimientos de las experiencias de los demás). Esta visión propone que se puede disuadir más eficazmente la delincuencia por los castigos que sean certeros, rápidos, y



proporcionales al daño causado. Las penas que cumplan estos criterios desalentarían a los infractores de la reincidencia y alentaría a otros a ser respetuosos de la ley. Esta filosofía de "disuasión" es la explicación por excelencia de la delincuencia por más de cien años, sin embargo, a principios del siglo XX su popularidad fue eclipsada por las explicaciones positivistas argumentando que delinquentes difieren de los no delinquentes de maneras importantes (por ejemplo, la socialización).

A finales de 1960 el economista Gary Becker¹ cuestionó los enfoques positivistas de la delincuencia, argumentando que: "...una teoría útil de la conducta delictiva puede prescindir de las teorías especiales de anomia, las deficiencias psicológicas, o la herencia de las características especiales, y simplemente extender el análisis de elección habitual de los economistas.". Caracterizando su enfoque como un esfuerzo de "...resurrección, modernización y ... mejora" del enfoque racional de Beccaria y Bentham. Becker argumenta que los criminales no son biológicamente, psicológicamente, o sociológicamente diferentes de no criminales, y que la decisión de delinquir no se originó en un conjunto único de los motivos, sino que es influenciado por los mismos factores que motivan a todos los comportamientos intencionales. Becker y otros desarrollaron estas ideas en lo que ahora se llama el enfoque neoclásico o económico de la

Teoría del Crimen. De acuerdo con esta perspectiva, la gente elige delinquir frente a las alternativas no delinquir de la misma manera que eligen estrategias particulares cuando actúan como consumidores en el mercado. Esta explicación teórica (Becker, 1976) se basa en los siguientes supuestos:

1. Las acciones de las personas pueden ser entendidas como racional, es decir, las personas son naturalmente motivadas para perseguir sus propios intereses y su comportamiento puede ser examinado como un intento de satisfacer estos deseos. Esto no impide que las personas de actuar irracionalmente, como por ejemplo cuando se elige algo sobre la base de su disponibilidad en vez de su capacidad para satisfacer un deseo, ni tampoco significa necesariamente que las personas están conscientes de sus intentos de maximizar sus propios intereses. En cambio, el enfoque económico, simplemente asume que la mayoría de las acciones puede ser entendida como racional.
2. La ganancia material es un interés común, pero no es el único, ni necesariamente la principal influencia en las decisiones de las personas. Las personas tienen un conjunto mucho más rico de los intereses y las acciones que emprenden reflejan sus intentos de aprovechar al máximo estas. Desafortunadamente, es casi imposible para las personas cumplir o adaptarse por completo a sus intereses: sus deseos son ilimitadas, mientras que la riqueza, ingresos, oportunidades y otros recursos son finitos.

¹ Economista estadounidense y profesor de la Universidad de Chicago. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1992 por ampliar el dominio del análisis microeconómico a un mayor rango de comportamientos humanos fuera del mercado.



3. Debido a que son racionales y deben tomar decisiones, las personas siempre pueden expresar sus preferencias entre los resultados y las cosas que deseo (materias primas). Su priorización de preferencias refleja sus expectativas de satisfacción (utilidad) un resultado o producto (función de utilidad) y cuánto va a costar (costo de oportunidad). Cuando se da la opción, los agentes económicos racionales eligen las acciones que proporcionen un resultado o producto que creen que maximizará la utilidad (satisfacción, no necesariamente el placer) y minimizar los costos. Las preferencias de las personas son estables en el tiempo y en cualquier momento pueden ser jerárquicamente ordenados de mayor a menor valor.
4. La racionalidad de los agentes económicos que prefieren más de un resultado deseado o producto a menos, y prefieren un menor costo que uno más alto, sin embargo, más personas tienen un resultado o producto, menos probable es que aumente aún más contribuyen a su satisfacción (la utilidad marginal decreciente). Así, las personas que tienen una abundancia de algo que está dispuesto a renunciar a muchas cosas de relativamente poco a cambio (el dinero puede ser la única excepción significativa, ya que, en esencia, puede convertirse en cualquier producto).
5. Las personas basan sus decisiones racionales en la información que recogen. Se esfuerzan por saber tanto como es

óptimamente posible sobre la disponibilidad de cada resultado potencial y la utilidad de los productos básicos; sin embargo, reconocen que la recolección de información es en sí un costo (por ejemplo, ver la teoría de la acumulación óptima y racional de la información costosa). Así, aunque los actores económicos racionalmente se encargaran de utilizar toda la información disponible en la toma de decisiones, muchas decisiones se harían con información incompleta y no puede servir para maximizar la utilidad.

6. Las personas tienen recuerdos imperfectos y calculan mal a menudo, estos atributos pueden comprometer aún más su capacidad para maximizar la utilidad.
7. El futuro no es completamente predecible. Todas las decisiones se basan en utilidades esperadas y tienen un elemento de riesgo o incertidumbre. Por lo tanto, las actitudes de los agentes económicos hacia la incertidumbre y el riesgo afectan su valoración de la satisfacción asociada con diversos resultados o productos.

A pesar de estos supuestos que se suelen utilizar para describir las decisiones legales y acciones comerciales, Becker (1974) y otros teóricos neoclásicos argumentan que se puede ampliar la teoría del crimen para incluir opciones de comportamiento criminal. Por lo tanto:

1. Los agentes económicos eligen delinquir con el mismo análisis de costo-beneficio que utilizan a la hora de elegir los



comportamientos legales: una decisión de delinquir refleja el cálculo normal racional. Por lo tanto, esta explicación de la delincuencia no tiene que introducir las características de personalidad, experiencias de fondo, o contingencias de la situación.

2. La decisión de delinquir implica cálculos basados en estimaciones de la disponibilidad de una oportunidad legal, costos y capacidad de proporcionar un fin deseado (es decir, la utilidad esperada), frente a la disponibilidad de una oportunidad ilegal, los costos y la capacidad de ofrecer el mismo o similar. Ambos comportamientos legales e ilegales pueden proporcionar una amplia gama de beneficios que incluyen la ganancia material, aprobación o prestigio, "psíquico" o vuelve emocional (por ejemplo, la emoción, el honor, la venganza, un sentido de equidad), y otros rendimientos no pecuniarios. Los costos potenciales de estos comportamientos incluyen el tiempo, la transacción y "psíquico" los costos (por ejemplo, ansiedad). La delincuencia, sin embargo, presenta un conjunto único de reputación (por ejemplo, la pérdida de respeto), psicológica (por ejemplo, culpa, vergüenza, ansiedad) y los costos de castigo (por ejemplo, multas y encarcelamiento).
3. La decisión de ofender también se ve influenciada por la tolerancia de una persona o el disfrute de tomar riesgos. Por lo tanto, todas las cosas iguales, los que cometen delitos a tasas relativamente altas

son de riesgo comparativamente más tolerantes al riesgo o la búsqueda, los que ofenden a precios moderados tienen un riesgo relativamente más neutral, y los que rara vez o nunca, violan las leyes penales tienen un riesgo relativamente más aversión.

4. "La manera más efectiva para reducir la delincuencia es aumentar las percepciones de las personas que los costos de ofender superará sus recompensas, y que los beneficios de la conducta jurídica superan sus costos."

3. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

3.1 IMPACTO PRESUPUESTARIO

El impacto presupuestario se puede definir como el efecto que la nueva ley o la reforma respectiva puede tener en las partidas de ingresos y egresos del presupuesto. Estos pueden ser negativos (aumento de gastos, disminución de ingresos) o positivos (lo contrario). El orden de entrada puede invertirse: según si es más importante en los gastos o en los ingresos.) de oficinas semejantes dentro del sector público.

En el Gasto

Es importante recalcar que el impacto en el gasto, puede ser recurrente o no recurrente. Ejemplo típico es la fundación o creación de una nueva oficina o dependencia pública. El gasto de funcionamiento es recurrente, pero el de instalación sólo se da por un período inicial y por algunos pocos o ningún periodo subsiguiente. Para calcular la magnitud de estos gastos suele recurrirse a los



datos sobre estadísticas presupuestarias (de ingresos y gastos

En el Ingreso

El impacto positivo o negativo en el ingreso puede darse por la implantación de una tasa de cobros por servicios (positivo) o de su eliminación (negativo).

La otra cara de la moneda es que el sacrificio para el fisco representa un beneficio para los usuarios o consumidores. Por ello es importante tratar de determinar el segmento favorecido con la disposición respectiva, que por lo general tienden a ser sectores de poder adquisitivo elevado. Otro ejemplo típico es la exención de un arancel o la eliminación del mismo. A veces una nueva ley lo que hace es extender el periodo de vigencia de tal exención. La medición de estos impactos debe hacerse a precios corrientes y a precios constantes o en U.T.

Este Proyecto de Ley Propuesto propende a evitar el comportamiento delictivo de los agentes económicos en cuanto a la recepción de ayudas económicas o aportes financieros por parte de personas u organismos extranjeros que estén destinados a atentar contra la soberanía, la independencia de la Nación, propiciar un ilícito cambio de las instituciones nacionales o derrocar a las autoridades legítimamente constituidas por lo que se puede afirmar que la aprobación del presente proyecto de Ley no implicará variación alguna en los ingresos y gastos del Fisco Nacional y en consecuencia el impacto presupuesto para el Estado es nulo.

3.2 IMPACTO ECONÓMICO

El espíritu del legislador al procurar normar la percepción de ayudas económicas que pudieran percibir las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos es eliminar esta práctica.

Dada cuenta de la Teoría del Crimen antes expuesta se puede intuir que el comportamiento de los agentes económicos, una vez estos realicen el análisis costo-beneficio de incumplir con la norma propuesta, se adecue a los preceptos constitucionales de no inherencia y autodeterminación de la nación.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1. CONCLUSIONES

- La aprobación del presente proyecto de Ley no implicará variación alguna en los ingresos y gastos del Fisco Nacional y en consecuencia el impacto presupuesto para el Estado es nulo.
- El comportamiento de los agentes económicos, una vez estos realicen el análisis costo-beneficio de incumplir con la norma propuesta, se adecue a los preceptos constitucionales de no inherencia y autodeterminación de la nación.